



Ejecuciones extrajudiciales

11

Balance de las recomendaciones anteriores

En el EPU del 2018 solo se realizaron dos recomendaciones por Estados Unidos y Venezuela en relación a las Ejecuciones Extrajudiciales. Estas estuvieron dirigidas a investigar y enjuiciar a los responsables de este delito de lesa humanidad y dar con los más altos responsables detrás de las ordenes que impulsaron y motivaron la ejecución de esta practica. Durante el gobierno del ex presidente Iván Duque, no se avanzo en la implementación de estas recomendaciones, por el contrario hubo un retroceso en la implementación de programas o medidas para erradicar esta práctica al interior de las fuerzas armadas. Muestra de ello es la designación de una cúpula militar conformada por militares anteriormente implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales y vínculos con el paramilitarismo, como es el caso del ex comandante del Ejército General (r) Nicasio Martínez (1), y del General (r) Eduardo Zapateiro como comandante del Ejército (2).

Los pocos avances en la investigación y sanción de este delito son los hechos por la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco de caso 03. Sin embargo, aún no hay avances en el establecer los más altos o máximos responsables del estado encargados de planear, direccionar y ejecutar la comisión de este delito, tal como se ha recomendado por Estados Unidos y Venezuela. Preocupa el estado de la investigación y procesos en la Fiscalía General de la Nación, ya que esta ha dejado estas funciones a la justicia transicional surgida del Acuerdo Final de Paz y no hay avances en lo que es de su competencia.

Por último, es de resaltar que persisten hechos en que esta práctica se sigue realizando en el país bajo distintas modalidades, como bombardeos (3), homicidios en el marco de protestas sociales y uso desproporcionado y abusivo de la fuerza por agentes del Estado.

(1) "El comandante del Ejército Nacional, Nicasio de Jesús Martínez Espinel, estuvo al mando, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de una brigada señalada por la fiscalía general de por al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales. Martínez Espinel, fue comandante de la X Brigada entre octubre de 2004 y enero de 2006. En ese periodo se registraron al menos 23 casos de asesinatos de civiles presentados como combatientes". Fundación Paz y Reconciliación, (2019, junio 5). El general de cuatro soles señalado de graves crímenes. <https://www.pares.com.co/post/el-general-de-cuatro-soles-se%C3%B1alado-de-graves-cr%C3%ADmenes>

(2) ...tiene que ver con la desaparición forzada del padre del volante de la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero, Jaime Enrique Quintero Cano, quien comenzaba a prestar el servicio militar en 1995. Según relató Carlos Quintero, hermano del desaparecido, a la emisora local Caracol Radio, la última vez que supieron de su hermano fue el primero de marzo de 1995, cuando fue trasladado desde la IV Brigada en Medellín hasta la Brigada XVII en el municipio de Carepa, en la subregión del Urabá, en Antioquia, donde Zapateiro era capitán. AA mundo, (2019, diciembre 30). Los hechos que enredan al nuevo comandante del Ejército colombiano. <https://www.aa.com.tr/es/mundo/los-hechos-que-enredan-al-nuevo-comandante-del-ej%C3%A9rcito-colombiano/1686507>

(3) ...El pasado martes 29 de marzo, la organización denunció que el ataque adelantado contra disidencias de las Farc en Puerto Leguizamó (Putumayo), en el que el ministro de Defensa, Diego Molano, informó de la muerte de nueve presuntos disidentes, se trató realmente de un caso de ejecuciones extrajudiciales, denominadas comúnmente como falsos positivos. El Espectador, (2022, marzo 30). "Eran civiles, no guerrilleros": organización indígena que denuncia falsos positivos. <https://www.elespectador.com/judicial/eran-civiles-no-guerrilleros-lider-indigena-que-denuncia-presuntos-falsos-positivos/>

Desafíos

Garantizar verdadera participación de las víctimas, ya que en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz las actuaciones se ha centralizado en la ciudad de Bogotá, haciendo difícil la participación de las víctimas que se encuentran en zonas rurales del país.

Se debe hacer un llamado a las altas cortes de Colombia, en particular al Consejo de Estado y la Corte Constitucional, quienes han sacado sentencias regresivas que sostienen que se aplica el principio de caducidad para graves violaciones de DDHH. Estas decisiones son contrarias al principio de convencionalidad. Es urgente que los tribunales colombianos acojan los estándares internacionales que establecen que estos graves crímenes no prescriben, específicamente los estándares desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

Se debe de generar una acción mucho más coordinada e interinstitucional entre la Fiscalía General de la Nación y la JEP, para que se establezcan rutas y procedimiento para resolver de fondo a aquellos casos que no han sido priorizados por la JEP, pues solo los casos de siete regiones han sido priorizadas por este tribunal y el resto de casos se encuentran congeladas en justicia ordinaria, sin ningún avance en su investigación.

Recomendaciones

1. Rutas de coordinación interinstitucional y metodológica entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía General de la Nación para el juzgamiento de máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales que no permita ambigüedades a la hora de comprender el concepto de máximo responsable.
2. Garantizar la participación plena y efectiva de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en las audiencias que se adelantan ante la JEP, cumpliendo con el principio de publicidad en todas sus actuaciones. La reserva en las actuaciones o la restricción de acceso a la información debe ser una excepción y no la regla general como se ha venido advirtiendo.
3. La Fiscalía General de la Nación debe continuar con las investigaciones sobre ejecución extrajudiciales para que exista una respuesta de la justicia ordinaria en aquellos casos que la JEP no priorizó.